

# NEW LEFT REVIEW 145

SEGUNDA ÉPOCA

MARZO-ABRIL 2024

## ARTÍCULOS

MICHAEL MANN	Explicar las guerras	7
GÖRAN THERBORN	Los futuros de la izquierda	33

## ENTREVISTA

KŌHEI SAITŌ	Reverdecer a Marx	51
-------------	-------------------	----

## ARTÍCULOS

LORNA FINLAYSON	Sobre los males menores	67
NICK BURNS	La deuda estudiantil	75
JIWEI XIAO	Ficciones chinas	99
PETER OSBORNE	¿Política planetaria?	119

## CRÍTICA

ROB LUCAS	Regla gruesa, regla fina	135
JACOB COLLINS	Lecciones de egohistoria	153
TERRY EAGLETON	Joyce moderno	168

---

[WWW.NEWLEFTREVIEW.ES](http://WWW.NEWLEFTREVIEW.ES)

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



SUSCRÍBETE

**ts**  
traficantes de sueños



NICK BURNS

## LA DEUDA ESTUDIANTIL EN LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE

**L**A CANCELACIÓN DE la deuda estudiantil fue uno de los gritos de guerra de la campaña de Bernie Sanders en 2020, una medida paliativa inmediata endosada a la promesa de la campaña de 2016 de hacer la educación superior gratuita para todos. La propuesta cosechó su mayor apoyo entre los profesionales precarios, retratados en los medios de comunicación como una generación en riesgo de «lanzamiento fallido»: bien formados, subempleados y perpetuamente adolescentes, cuyo matrimonio y adquisición de bienes se hallaban pospuestos por la persistencia de la deuda estudiantil<sup>1</sup>. Durante la pandemia, Trump concedió una tregua en forma de aplazamiento en los pagos. Los graduados endeudados depositaron sus esperanzas de una amnistía permanente en el gobierno demócrata dirigido por Joe Biden, que planeaba cancelar 400 millardos de dólares en concepto de deuda estudiantil (una cuarta parte del total), que incluía el saldo vivo del 45 por 100 de los prestatarios.

La decisión del Tribunal Supremo de junio de 2023, que anuló la orden de cancelación de la deuda de Biden, alegando que el gobierno carecía de autoridad para «transformar» la normativa sobre los préstamos, marcó el ocaso de un periodo de fuerza y optimismo en un segmento políticamente comprometido de entre los 45 millones de prestatarios estadounidenses. La decisión fue recibida con abatimiento por los deudores y con satisfacción en los bastiones republicanos, pero solo provocó reacciones apagadas en los círculos demócratas, divididos como estaban entre la conexión cada vez más firme del partido con los licenciados

---

<sup>1</sup> Una percepción visible incluso en la ficción contemporánea, véase Jennifer Wilson, «How Student Debt Killed the Plot», *The New York Times*, 11 de septiembre de 2022.

universitarios, por un lado, y la preocupación por el impacto social «regresivo» de la cancelación de la deuda, por otro<sup>2</sup>. Desde entonces, la Casa Blanca ha mostrado su contrariedad ante la reanudación de los pagos de los préstamos tras la hoja de parra de un programa de condonación mucho menor y poco sistemático.

La relevancia de la deuda estudiantil en la sociedad estadounidense se corresponde con sus enormes dimensiones fiscales. Ascendiendo en estos momentos a un total de 1,7 billones de dólares según la Reserva Federal, equivale al PIB de Canadá, superando los préstamos concedidos para la adquisición de automóviles y la deuda derivada de las tarjetas de crédito. Dos tercios de los estudiantes universitarios estadounidenses piden dinero prestado, en su mayoría a la Administración federal, para poder ir a la universidad. Los prestatarios no son, sin embargo, iguales desde el punto de vista socioeconómico: los titulados superiores, que representan un tercio del total, suelen ser los más endeudados, ya que su elevado endeudamiento para acceder a las escuelas de derecho y medicina se amortiza fácilmente gracias sus altos salarios. En general, la deuda se concentra en la mitad superior de la distribución de la renta. En proporción a los ingresos, sin embargo, la carga es mayor entre los más pobres a pesar de los saldos más bajos. Los graduados que rondan ahora la treintena, la generación del milenio, son los más endeudados. Los hogares hispanos están infrarrepresentados entre los deudores, mientras que los negros se hallan sobrerrepresentados (y deben más que la media)<sup>3</sup>.

En otras partes del mundo anglosajón, los estudiantes deudores se enfrentan a condiciones uniformes y relativamente favorables vinculadas a los ingresos: básicamente, hablaríamos de un impuesto sobre los ingresos futuros por encima de un umbral predeterminado. En Estados Unidos, por el contrario, el reembolso vinculado a los ingresos solo es posible eligiendo entre una desconcertante gama de alternativas ofrecidas al conjunto estándar de condiciones, que exigen el reembolso total

---

<sup>2</sup>The Editorial Board, «Student Debt Is Crushing. Cancelling It for Everyone Is Still a Bad Idea», *The New York Times*, 14 de mayo de 2022.

<sup>3</sup>Melanie Hanson, «Student Loan Debt by Gender [2023]: Men vs Women», Education Data Initiative, actualizado el 16 de julio de 2023; «Survey of Consumer Finances» en Aditya Aladangady *et al.*, *Changes in US Family Finances from 2019 to 2022: Evidence From the Survey of Consumer Finances*, Washington DC, 2023; Andre Perry, Marshall Steinbaum y Carl Romer, «Student Loans, the Racial Wealth Divide and Why We Need Full Student Debt Cancellation», Brookings Institute, 23 de junio de 2021.

en un plazo de diez años sin tener en cuenta los ingresos. En general, las condiciones son duras: los préstamos no pueden cancelarse por quiebra y las cantidades adeudadas pueden detraerse de los pagos de la Seguridad Social por vejez. Con frecuencia, los padres solicitan préstamos adicionales para financiar la educación de sus hijos (en los préstamos para estudios de pregrado, este tipo de deuda representaba la cuarta parte del total en 2019).

Como era de esperar, dado que los deudores estudiantiles están muy sobrerrepresentados en los medios de comunicación liberales y de izquierda, todo este asunto ha sido objeto de un intenso debate en Estados Unidos. Al igual que ocurre con otros temas, la discusión suele plantearse en términos de merecimiento moral: si los estudiantes merecen que se les condonen sus deudas, si es justo que los contribuyentes paguen la factura. Incluso el término «condonación de la deuda», ampliamente utilizado, plantea la cuestión como un asunto moral. Esta tendencia es indicativa tanto de las distorsiones de nuestro discurso político como de los limitados horizontes de resistencia política de que disponen los deudores. David Graeber ha escrito sobre el proceso mediante el cual la desigualdad inherente a las relaciones entre deudores y acreedores se inviste de una sanción moral que dificulta la resistencia. Y Cédric Durand, por su parte, ha descrito la dinámica material que inhibe la oposición: «A escala sociopolítica, el endeudamiento de los hogares alimenta una relación inmediatamente antagónica entre acreedores y asalariados/prestatarios. Sin embargo, esta relación no se manifiesta fácilmente, ya que, a diferencia de la relación salarial, *a priori* enfrenta a cada hogar individual con sus acreedores de forma aislada y no colectiva»<sup>4</sup>. La consolidación, durante el mandato de Obama, del gobierno federal en tanto que principal prestamista de los estudiantes aumentó en alguna medida las posibilidades de solidaridad, pero no alteró fundamentalmente estas relaciones sociales.

No es de extrañar, por lo tanto, el tono moralista que adoptan a menudo los tratamientos periodísticos de la deuda estudiantil consistentes habitualmente en compendios de conmovedoras anécdotas sobre graduados y sus familias en apuros ante la obligación de devolver los préstamos.

---

<sup>4</sup> David Graeber, *Debt: The First 5,000 Years*, Nueva York, 2014, p. 4 [ed. cast.: *En deuda: Una historia alternativa de la economía*, Barcelona, 2021]; Cédric Durand, *Fictitious Capital: How Finance Is Appropriating Our Future*, Londres y Nueva York, 2017, p. 87; ed. cast.: *El capital ficticio: Cómo las finanzas se apropian de nuestro futuro*, Barcelona, 2018.

Dado que es difícil generalizar a partir de estos relatos, cuyas circunstancias varían de deudor a deudor, el lector no logra comprender los contornos sociales generales de la deuda estudiantil<sup>5</sup>. Los argumentos sobre la justicia de la condonación de la deuda –si equivaldría a una redistribución hacia los sectores más ricos afines al Partido Demócrata o supondría la liberación de una generación condenada de otro modo a un trabajo precario sin perspectivas de una vida digna– tienden a pasar por alto la dimensión social de la financiación de los estudios tal y como se plantea en la actualidad. ¿Cuál es la función de los préstamos estudiantiles –y, por extensión, de la asistencia masiva a la universidad– en la sociedad y la política estadounidenses?

La pregunta tiene implicaciones de largo alcance. En sus «Siete tesis sobre la política estadounidense», Dylan Riley y Robert Brenner describen a una clase trabajadora estadounidense –definida en términos generales como trabajadores asalariados, incluidos los médicos y abogados con altos ingresos– fragmentada en función del nivel educativo (así como de la raza) en la que los universitarios se adhieren cada vez más al Partido Demócrata, mientras las personas sin estudios universitarios se perfilan como el electorado principal del Partido Republicano<sup>6</sup>. La financiación de los estudios afecta directamente a la cuestión de cómo se crea y se perpetúa esta división entre los que tienen y los que no tienen una licenciatura, ya que endeudarse es ahora, en la mayoría de los casos, necesario para obtener un título.

Los estudiantes endeudados esperan reembolsar sus préstamos mediante un salario, incrementado gracias al poder de sus títulos. Este proceso, por el que jóvenes de dieciocho años se convierten en «inversores en su propio futuro», constituye una dinámica que se difunde abiertamente en gran parte del ámbito de la «política» de la educación superior y que entraña riesgos además de recompensas. Los estudios sugieren que la enseñanza superior sigue siendo una buena inversión, dotada de una prima salarial para los titulados que compensa los altos precios de las matrículas en Estados Unidos. Pero hay muchas salvedades. El 40 por 100 de quienes empiezan una licenciatura no la terminan y como no

---

<sup>5</sup> Véase, entre otros, Rachele Hampton, «Debt Nation», *Slate*, 16 de julio de 2020; Danielle Douglas-Gabriel y John Harden, «The Faces of Student Debt», *The Washington Post*, 6 de abril de 2021; Eleni Schirmer, «The Ageing Student Debtors of America», *The New Yorker*, 27 de julio de 2022.

<sup>6</sup> Dylan Riley y Robert Brenner, «Siete tesis sobre la política estadounidense», *NLR* 138, enero-febrero 2023.

hay prima salarial ligada al nivel educativo conocido oficialmente como «cursados algunos estudios universitarios», las deudas contraídas para realizar una carrera no terminada se convierten en un signo negativo en términos de las finanzas personales. El hecho de que los jóvenes estadounidenses comiencen y terminen una carrera y sean capaces de pagar las deudas que contraen en el proceso depende tanto de las circunstancias sociales como de una serie de aptitudes individuales más o menos arbitrarias, aunque en el debate nacional estas se hallen tremendamente moralizadas (aptitudes no solo para el trabajo académico y los exámenes, sino también para navegar por el sistema kafkiano de ayudas financieras, etcétera). Dado que el endeudamiento es para muchas personas la condición previa para obtener la prima salarial del licenciado, asistir a la universidad se convierte en una apuesta arriesgada para asegurarse un estilo de vida de clase media. Tal y como expondré más adelante, lo mucho que hay en juego en esta apuesta intergeneracional a escala de masas contribuye a enfrentar a los licenciados con los no licenciados, pero también abre una línea de fractura entre los endeudados y quienes no lo están.

Si bien la financiación de los estudios es un elemento clave en la reproducción de las divisiones existentes en el seno de la ideológicamente fracturada clase trabajadora estadounidense actual, conviene no olvidar que los fundamentos de estas fisuras se sentaron en la segunda mitad del siglo XX. Entonces la extensión del crédito respaldado por el Estado, iniciada en las décadas de 1950 y 1960, pero objeto de una vigorosa expansión durante las dos décadas siguientes, acarreó un incremento masivo del número de estudiantes universitarios. En el resto de este artículo examino la evolución de la financiación de los estudios en Estados Unidos desde sus orígenes durante el periodo de posguerra para evaluar a continuación su situación en la coyuntura actual. ¿Cuáles fueron las condiciones y las fuerzas que determinaron la aparición del complejo financiero estudiantil estadounidense y cuál ha sido el impacto social, así como el coste, del aumento de la asistencia a la universidad mediante la proliferación del crédito?

#### APRENDIZAJE FINANCIARIZADO

A diferencia de lo que ocurre en gran parte de Europa, el gobierno federal de Estados Unidos no ejerce ningún control directo sobre las

universidades públicas del país, que dependen para su supervisión de los cincuenta estados federales. Incluso la potestad de otorgar el estatus de universidad a una determinada institución y de supervisar los exámenes nacionales de admisión recae en organizaciones privadas (organismos de acreditación reconocidos por el Departamento de Educación y el College Board, respectivamente). Los principios de libertad religiosa, muy arraigados en los albores de la República, habían afianzado el control privado y de los estados en una época en la que las universidades seguían siendo instituciones piadosas. A partir de la década de 1860, el gobierno federal concedió a los estados los medios necesarios para fundar un nuevo conjunto de universidades, las llamadas «*land-grant colleges*», dedicadas al «conocimiento útil», pero el panorama preexistente de la enseñanza superior quedó intacto. El *New Deal* introdujo igualmente en este ámbito cambios de menor alcance que en otros, lo que refleja la relativa poca importancia que tenía esta cuestión a ojos de aquella coalición social, inclinada hacia las clases trabajadoras urbanas y hacia el Sur, territorio menos instruido. Su principal contribución, el programa de trabajo-estudio, ofrecía dinero federal a los estudiantes que realizaban trabajos menores concebidos por las universidades. Sorprendentemente, incluso en este momento álgido de la confianza y la actividad públicas, en el ámbito de la enseñanza superior el Estado federal se limitó a ofrecer incentivos condicionales. Este estilo indirecto —a la manera de un filántropo que, al carecer de control político directo sobre los asuntos trata de influir en ellos aportando o reteniendo dinero— seguiría siendo una constante en las décadas siguientes.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la coalición del *New Deal* dejó su impronta en la enseñanza superior con la *Servicemen's Readjustment Act* (1944), su última gran disposición en materia de bienestar social. La American Legion, un grupo de veteranos con una afiliación masiva, consiguió presionar con éxito a un Congreso receloso de los disturbios laborales de posguerra —quizá porque no había olvidado la acampada de veteranos que se había enfrentado a Hoover en 1932— para que ampliara las prestaciones para los militares que regresaban del frente. Aunque inicialmente pensadas solo para aquellos con «capacidades excepcionales», las prestaciones terminarían siendo universales. En contra de las predicciones, que hablaban de que menos del 10 por 100 de los veteranos harían uso de ellas para obtener un título, 2,2 millones lo hicieron, lo que representaba el 15 por 100 de quienes cumplían los requisitos. Sin embargo, a pesar del aura de la *Servicemen's Readjustment Act* en la

conciencia popular, sus efectos directos sobre el nivel educativo de la población no fueron tan radicales como a menudo se piensa: su impacto fue en gran medida «compensatorio», invirtiendo lo que de otra manera habría sido una caída en la tasa de finalización de estudios postsecundarios, que en cambio aumentó modestamente. En comparación con 1940, en 1960 el porcentaje de la población mayor de 25 años con un nivel educativo de bachillerato o superior se había incrementado en un 3 por 100. El beneficiario típico de la *Servicemen's Readjustment Act* tampoco fue el soldado de infantería de clase obrera, catapultado a la prosperidad gracias a la obtención de un título universitario, sino fundamentalmente aquellos situados en el cuarto quintil de la distribución de la renta, esto es, la clase media<sup>7</sup>.

No obstante, la afluencia de antiguos soldados no pertenecientes al restringido estrato aristocrático que había dominado las universidades hasta entonces fue lo suficientemente real, y su éxito en las aulas fue lo bastante pronunciado, como para suscitar las quejas de los estudiantes no militares, quienes se resentían de la influencia de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en la «curva» de calificaciones. Ello también quebró la actitud antidemocrática de los dirigentes de la enseñanza superior estadounidense, hasta entonces un reducto de elitismo descarado y de oposición intransigente a la injerencia gubernamental. Hasta el mismísimo presidente de Harvard, James Conant, una figura relativamente progresista, había insistido en que la matriculación masiva de veteranos era un error, de lo cual ahora se retractaba<sup>8</sup>.

Ello no se tradujo en un apoyo generalizado a la financiación pública. Cuando en 1948 la Comisión Zook instituida por Truman, que se hallaba dirigida por un antiguo funcionario de Roosevelt, propuso la expansión masiva del sistema público mediante la financiación federal del 20 por 100 de los estudiantes, concebida de acuerdo con el modelo de la *Servicemen's Readjustment Act*, se topó con los feroces ataques del furibundo sector educativo privado<sup>9</sup>. Tampoco es que estos ataques fueran necesarios: la coalición del *New Deal*, debilitada desde 1937 y dividida de nuevo en facciones, carecía de poder para llevar a cabo esa

---

<sup>7</sup> Marcus Stanley, «College Education and the Midcentury GI Bills», *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 118, núm. 2, 2003.

<sup>8</sup> Elizabeth Tandy Shermer, *Indentured Students: How Government-Guaranteed Loans Left Generations Drowning in College Debt*, Cambridge (MA), 2021, pp. 99-111.

<sup>9</sup> Roger Geiger, *American Higher Education Since World War II: A History*, Princeton (NJ), 2019, p. 13.



transformación por medio del Estado. Sin embargo, el deseo de ampliar la asistencia a la universidad se mantuvo, respaldado por una gama más amplia de fuerzas e impulsado por las nociones liberales de «educación para la democracia», características del periodo de posguerra; por la demanda, percibida y real, de una mayor oferta de mano de obra cualificada; y por la ideología de la Guerra Fría, que contemplaba toda ventaja potencial en la competencia entre el socialismo y el capitalismo como una oportunidad para fortalecer la prosperidad y la superioridad militar.

La existencia de ayuda financiera federal de un tipo u otro parecía necesaria para llevar a cabo la tarea, pero resultaba difícil dilucidar qué forma debía adoptar. El Estado federal seguía siendo reacio a subvencionar directamente a los estudiantes. Las subvenciones generalizadas, dirigidas a estudiantes tanto de centros públicos como de los privados, similar al modelo de la *Servicemen's Readjustment Act*, se antojaban como un despilfarro –se habían documentado ampliamente casos de fraude y derroche–, pero la idea de una financiación selectiva, discriminando entre universidades públicas y privadas, se topaba asimismo con fuertes resistencias.

Aunque Hoover había imaginado un papel más importante para los préstamos estudiantiles, lo cierto es que hasta ese momento estos habían sido marginales. Ahora, a medida que florecía el consumismo con el auge de la posguerra, un emprendedor funcionario empleado en el departamento de ayuda financiera de la Universidad de Harvard vio una oportunidad en la forma en que los empresarios habían «enseñado» a los consumidores estadounidenses a «utilizar los pagos a plazos para comprar prácticamente cualquier cosa» que costara más de 10 dólares. Pero seguía existiendo el problema de las garantías: los bancos no estaban dispuestos a conceder préstamos a los estudiantes, ya que un diploma, a diferencia de una casa o un coche, no podía ser embargado. La idea de que el Estado pudiera conceder créditos directamente seguía oliendo a «socialismo». Pero en 1957, el pánico suscitado por el lanzamiento del Sputnik por parte de la URSS disipó ese fantasma: era necesario ponerse al día, así que en 1958 el gobierno federal fue autorizado a conceder préstamos directamente, obviando la cuestión de las garantías. Sin embargo, al final de las prolongadas negociaciones entre los legisladores esta autorización fue redimensionada, de modo que el crédito solo podría concederse a través de tramos limitados de «préstamos estudiantiles de defensa» (supeditados a un juramento de lealtad) para titulaciones en campos técnicos que se consideraba que proporcionaban a Estados Unidos una ventaja directa en la Guerra Fría.

Mientras tanto, los bancos descubrieron otra forma de entrar en el negocio de los préstamos concedidos a los estudiantes: varios estados del nordeste habían creado «agencias de garantía» cuasi públicas, que reunían fondos públicos y capital privado para respaldar estos préstamos privados concedidos a los estudiantes mediante un modelo ventajoso para los bancos. Pero la persistente cautela en cuanto a la capacidad de reembolso de los estudiantes hizo que las sumas en cuestión fueran inicialmente modestas: en Massachusetts, por ejemplo, se prestó menos de un millón de dólares en 1958<sup>10</sup>. Más sustanciales fueron los 40 millones de dólares de préstamos privados asegurados en 1965 a través de un fondo nacional de capital procedente de filántropos y escuelas, los United Student Aid Funds, (USAF)<sup>11</sup>.

El programa de la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson buscó una solución más duradera mediante una política de doble vía. La *Higher Education Act* de 1965 proporcionó becas para los pobres y concedió préstamos a la clase media, formada por los hogares perceptores de menos de 15.000 dólares anuales, pero excluyó de las ayudas a los estratos superiores, aun previendo, sin embargo, que el endeudamiento se produciría a gran escala, porque el umbral contemplado era muy superior a la renta familiar media de 6.900 dólares anuales. Para aplacar a un Congreso preocupado por el déficit, el Estado federal no concedería directamente los préstamos, sino que se limitaría a suscribirlos. Los bancos privados emitirían los nuevos «préstamos garantizados» y así estos no figurarían como pasivos en el balance del gobierno estadounidense. A tenor del nuevo acuerdo, el Estado federal pagaría los intereses de los préstamos a los bancos mientras los estudiantes estuvieran matriculados; al graduarse, asumirían ellos mismos el pago de dichos préstamos. La USAF y las agencias estatales de garantía recibieron decenas de millones en fondos públicos y, a cambio, cofirmarían los préstamos y reembolsarían a los prestamistas con intereses en caso de impago.

La política pretendía emular a la Federal Housing Authority (FHA), un legado de la vertiente público-privada del *New Deal*, que suscribía hipotecas emitidas por el sector privado. Eran políticas de bienestar con quita especulativa: en lugar de proporcionar o subvencionar un bien directamente, el Estado garantizaría los beneficios privados de la concesión de

---

<sup>10</sup> E. T. Shermer, *Indentured Students: How Government-Guaranteed Loans Left Generations Drowning in College Debt*, cit. p. 159.

<sup>11</sup> Josh Mitchell, *The Debt Trap: How Student Loans Became a National Catastrophe*, Nueva York, 2021, p. 27.

préstamos para obtener este bien y así, en teoría, hacer que el mismo estuviera disponible de forma más estable y asequible. Pero mientras que la FHA fue una intervención en un mercado hipotecario preexistente, aunque alterado y disfuncional, la introducción de los préstamos a estudiantes garantizados por el Estado supuso la construcción deliberada de un nuevo mercado financiero esencialmente de la nada. En 1955 solo se ofrecieron 26 millones de dólares en concepto de créditos a los estudiantes de todo el país; en 1966, había 700 millones de dólares disponibles; y solo dos años después, esa cifra se había duplicado<sup>12</sup>.

La educación superior en Estados Unidos se encontraba en la cresta de la ola de una expansión de proporciones históricas a escala mundial. La financiación federal de la investigación se había disparado tras el pánico del Sputnik, alcanzando los 800 millones de dólares anuales en 1964 (el aumento no fue liderado por el sector de la defensa, como a menudo se supone, sino en realidad por el Departamento de Sanidad y la National Science Foundation, dirigida por académicos). Las generosas aportaciones de donantes privados y de fundaciones empresariales (1 millardo de dólares solo de la Fundación Ford) contribuyeron a engrosar las arcas de las universidades del país. Y el nuevo programa federal de becas en función de las necesidades hizo que ni siquiera los estudiantes más pobres quedaran excluidos.

Pero los protagonistas fueron los estados, que, enardecidos por la ambición democrática de masas, construyeron sus sistemas universitarios públicos en la década de 1960, encabezados por Nueva York y California. El auge demográfico de la posguerra y la prima salarial de los licenciados hicieron que la población estudiantil pasara de 3 a 7 millones entre 1959 y 1969, y que el sistema público ofreciera ocho de cada nueve nuevas plazas. El gasto de los estados en educación superior se multiplicó diez entre 1960 y 1980<sup>13</sup>.

### *Sallie Mae entra en escena*

Desde el principio quedó claro que sin democracia social sería necesaria una expansión masiva del crédito al consumo para financiar el

---

<sup>12</sup> E. T. Shermer, *Indentured Students: How Government-Guaranteed Loans Left Generations Drowning in College Debt*, cit. pp. 133, 195.

<sup>13</sup> R. Geiger, *American Higher Education Since World War II: A History*, cit. p. 129; Michael Klein, «Settling a US Senatorial Debate: Understanding Declines in State Higher Education Funding», *Journal of Education Finance*, vol. 41, núm. 1, 2015, p. 4.

crecimiento continuado de la educación superior de masas. A medida que la demanda se disparaba durante la década de 1960, las universidades aumentaron las tasas de matrícula el 30 por 100 en términos reales, con lo que también aumentaron las peticiones de préstamos con respaldo federal. Pero incluso con sus beneficios garantizados por el gobierno estadounidense, los bancos no podían mantener el ritmo de la demanda. Wall Street seguía considerando los préstamos estudiantiles demasiado peligrosos. En vista de la situación, el gobierno de Nixon, sucumbiendo a la influencia de las altas finanzas y rechazando los planes alternativos, consistentes en ampliar las becas directas, buscó una vez más en la tradición de la intervención pública en el mercado hipotecario la pauta que debía seguirse.

Siguiendo el modelo de la Fannie Mae originada en el *New Deal*—la corporación cuasi pública que titularizaba hipotecas para apuntalar el mercado hipotecario secundario y que estaba garantizada por el gobierno estadounidense—, en 1972 fue creada la Student Loan Marketing Association («Sallie Mae») como una nueva agencia del programa de préstamos garantizados. Autorizada por sus estatutos a endeudarse casi tan barato como el gobierno federal, Sallie Mae, cuyas acciones eran propiedad de bancos y universidades, entregaba a los primeros dinero en efectivo a cambio de sus préstamos estudiantiles, simultáneamente eliminándolos de sus balances y, de paso, proporcionándoles liquidez para conceder nuevos préstamos.

Las «agencias de garantía», que ahora se habían abierto en los cincuenta estados, también se financiarían con fondos públicos. Así, los bancos privados concedían préstamos a los estudiantes, las agencias de garantía cuasi públicas reembolsaban a aquellos con intereses en caso de impago y a partir de 1976 el gobierno federal reembolsaría a su vez a las agencias de garantía. De esta forma, en nombre del libre mercado, la restricción presupuestaria y la limitación de la «injerencia» del Estado, Estados Unidos garantizó los beneficios de los bancos privados y de las organizaciones dotadas de concesión pública pero de propiedad privada, propiciando esta generosidad a un sistema de financiación estudiantil tremendamente ineficaz y costoso para las arcas públicas, que perduraría durante más de tres décadas.

La proporción de estadounidenses con titulación universitaria aumentó en un 50 por 100 durante la década de 1970, casi duplicando el ritmo

de crecimiento de la década anterior, hasta alcanzar el 17 por 100 de la población adulta en 1980. Europa Occidental, que había seguido los pasos de Estados Unidos en el desarrollo de la enseñanza superior pública después de la guerra, pero de forma más controlada, se quedó muy rezagada: las tasas de Francia y Alemania Occidental eran menos de la mitad que las de Estados Unidos. Hasta el comienzo de la era neoliberal, la expansión de la enseñanza superior estadounidense había sido impulsada por una constelación heterogénea de fuerzas, a saber: una visión de la educación pública democrática y de masas, cuya expresión, tanto a escala de los estados como a escala federal de la mano de los programas de la Gran Sociedad, fueron las subvenciones concedidas a los estudiantes pobres; el auge económico; la ideología de la Guerra Fría; el crecimiento demográfico; la inclusión masiva de las mujeres; la creciente afluencia de estudiantes «no tradicionales» (adultos con o sin trabajo); y, por supuesto, la creciente disponibilidad de préstamos estudiantiles.

A finales de la década de 1970, la balanza se inclinó decisivamente a favor de los dos últimos factores: los estudiantes adultos y la expansión del crédito al consumo. Tras la conclusión de la prolongada expansión económica de posguerra, los estados relajaron su compromiso con la educación superior pública destinada a la mayoría social, recortando la inversión en la misma al hilo de cada nueva recesión<sup>14</sup>. En 1978 el Congreso concedió unas condiciones de funcionamiento aún mejores a Sallie Mae, que desempeñaría un papel central en la siguiente fase de expansión financiarizada, además de beneficiar ostentosamente a sus ejecutivos y accionistas. Un libro reciente muestra cómo la corporación se propuso poner a prueba los límites del saqueo financiado con fondos públicos<sup>15</sup>. Sallie Mae contrató a una cabildera que se embarcó durante un año en un romance con Bill Ford, el representante demócrata de Michigan que controlaba la política federal de educación superior, y que abandonó rápidamente su oposición a esta organización y le concedió permiso para cotizar en Bolsa a partir de 1983.

En la oleada de préstamos respaldados por el gobierno, que ahora comenzaba en serio, los bancos ofrecían a los estudiantes *walkmans* y

---

<sup>14</sup> Las carreras de dos grandes defensores de la educación superior pública en los estados –Nelson Rockefeller en Nueva York y Clark Kerr en California, rector del sistema universitario californiano y arquitecto de su vasta expansión– se vieron truncadas por el avatar de una derecha ascendente: Ronald Reagan.

<sup>15</sup> J. Mitchell, *The Debt Trap: How Student Loans Became a National Catastrophe*, cit., pp. 44-53.

despertadores gratuitos para inducirlos a pedir préstamos. La deuda total de los estudiantes alcanzó los 39 millardos de dólares en 1986, el equivalente a un tercio de la deuda de las tarjetas de crédito. Tras haberse mantenido estable con la inflación durante la década de 1970, el coste real de la matrícula se triplicó en la década siguiente, lo cual generó a su vez una mayor demanda de créditos. Sallie Mae distribuyó beneficios récord a los inversores privados, mientras era pionera en la consolidación de los préstamos estudiantiles, que contemplaba plazos de amortización de hasta tres décadas.

La analogía entre la educación universitaria y la propiedad de la vivienda se convirtió ahora en una característica permanente de la sociedad estadounidense. Como elementos clave del estilo de vida de la clase media, ambos debían obtenerse contrayendo una deuda a largo plazo que también hacía las veces de inversión financiera. En ambos casos, el Estado federal se interesó por el bien en cuestión, pero sin controlarlo directamente, limitándose a influir en la oferta y sobre las condiciones del crédito. También intervino en el mercado para garantizar la igualdad de trato a los grupos minoritarios, mediante la *Fair Housing Act*, por un lado, y el *Title IX*, por otro. El paralelismo entre ambas medidas, que en Estados Unidos hoy en día se da por sentado, rige en pocos países de un desarrollo similar.

En 1990 el Congreso, avergonzado ante los excesos del sistema, trató de corregirlos, aunque sus acciones siguieron acelerando la tendencia a la privatización a través del sistema de financiación estudiantil. En 1992, cuando el valor real de las becas directas a los estudiantes pobres se redujo a la mitad, se introdujeron nuevos y peligrosos préstamos federales «no subvencionados», cuyos intereses empezaban a devengarse inmediatamente. Sallie Mae perdió su estatuto público en 1996, después de que un cambio en la contabilidad revelara el escandaloso alcance de la subvención federal concedida a sus accionistas. Esta revocación apenas desanimó a la empresa, que ahora era libre de entrar directamente en el floreciente negocio de los préstamos estudiantiles. Por otro lado, seguía obteniendo condiciones favorables de Washington; en 1998 una nueva normativa hizo casi imposible la condonación de la deuda federal de los estudiantes a través de la quiebra. El infame director ejecutivo de Sallie Mae entre 1999 y 2004 ganó 225 millones de dólares durante ese periodo. La ostentación de la avaricia de la empresa solo terminó después de que su prepotente intento de convertirse en una

compañía privada provocara la ira del Senado, que le retiró las prebendas de concesión de préstamos garantizados, pinchando así la fuente de los beneficios de la empresa. La crisis de 2008 reveló que la mayor parte de la cartera de Sallie Mae era deuda tóxica, lo cual hizo que se viera obligada a acudir al gobierno federal para ser objeto de un rescate anticipado en marzo de ese año. Sallie Mae, propietaria de un tercio del total de los préstamos estudiantiles, podía arrastrar consigo a todo el sistema de préstamos garantizados: en 2010 el gobierno de Obama logró a duras penas cerrar el programa<sup>16</sup>. Desde entonces, el Estado federal ha venido concediendo préstamos directamente a los estudiantes en lo que supone una vuelta a la estrategia de los «préstamos de defensa» de finales de la década de 1950, pero a una escala mucho mayor.

### *Perversidades*

El declive del auge demográfico de posguerra registrado durante las últimas décadas del siglo XX debería haber reducido el número de estudiantes; sin embargo, la participación en la educación superior siguió creciendo, gracias a la amplitud del crédito y a una prima salarial cada vez mayor para los licenciados, que alcanzó un máximo del 79 por 100 a mediados de la década de 2010. En 2022 los licenciados representaban el 36 por 100 de la población adulta<sup>17</sup>. La decadencia del ideal democrático de masas de mediados del siglo XX, unida a la enorme proliferación del endeudamiento estudiantil, transformó la educación superior estadounidense, tanto la pública como la privada, en un mercado turbopropulsado. Dada la abundante oferta de créditos garantizados por el Estado puesta a su disposición, los estudiantes podían ahora buscar los productos educativos más atractivos. Las instituciones más exclusivas se vieron inundadas de solicitudes de estudiantes, que buscaban lejos de casa el mejor rendimiento para lo que se consideraba una gran inversión.

Para sobrevivir en este nuevo entorno, las universidades públicas, que forman a la mayoría de los estudiantes, pues solo un tercio asiste a instituciones privadas, se vieron obligadas a aumentar el precio de las matrículas para compensar la disminución de los fondos públicos. Muchas aumentaron las tasas más de lo necesario y obtuvieron

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, pp. 88, 100-123.

<sup>17</sup> Leila Bengali *et al.*, «Falling College Wage Premiums by Race and Ethnicity», Federal Reserve Bank of San Francisco, 28 de agosto de 2023; US Census Bureau, American Community Survey, 2022.

beneficios por ello. Quedó claro que las universidades públicas solo podrían tener éxito en este difícil panorama, si se desprendían de su imagen de instituciones funcionales para las masas y ofrecían un producto educativo «*premium*», que tratara de igualar lo mejor que podía ofrecer el sector privado. Esto exigía nuevos y enormes desembolsos en instalaciones suntuosas, así como la ampliación de las burocracias no académicas. Entre 1976 y 2018, las universidades estadounidenses contrataron a casi el doble de administradores a tiempo completo que de docentes<sup>18</sup>. Además de supervisar el cumplimiento de un nuevo elenco de normativas federales, los nuevos empleados administrativos recaudaban fondos de donantes privados y se centraban en mejorar la vida de los estudiantes con el objetivo de ofrecer un «servicio al cliente» superior, emulando el planteamiento a medida de los pequeños centros de humanidades, ciencias y artes [*liberal arts colleges*] orientados al estudiante universitario no graduado.

Una mayor burocracia dedicada a promover la diversidad y el empoderamiento de los grupos minoritarios representaba otro tipo de «prestación» con que ganar posiciones en un mercado competitivo, prestación que la universidad planteaba como el producto de un compromiso concreto con sus «valores», y que, como solían pregonar los materiales promocionales, era el reflejo de una cultura institucional deseable. Valores similares se habían convertido en un artículo de fe entre los estratos superiores de las clases profesionales, que eran las que cosechaban las mayores ganancias salariales gracias a sus titulaciones. Al desarrollar su propio aparato de DEI (diversidad, equidad e inclusión), incluso a costa de un nuevo aumento de las matrículas, una universidad podía enviar a los futuros estudiantes la preciada señal de que su título les proporcionaría la necesaria formación cultural, así como el conjunto adecuado de ideas y costumbres para prosperar en los lucrativos recintos del mundo profesional, donde el apoyo a la diversidad, la equidad y la inclusión era *de rigueur*.

El resultado de estas dinámicas es un panorama de la educación superior marcado por el aumento de los costes y por contrastes cada vez más netos<sup>19</sup>. La era de las «universidades estatales *disneyficadas*» ha

---

<sup>18</sup> Michael Delucchi *et al.*, «What's That Smell? Bullshit Jobs in Higher Education», *Review of Social Economy*, 17 de junio de 2021.

<sup>19</sup> Un artículo publicado recientemente en *National Affairs* llamó la atención al negar que los precios reales de las matrículas hubieran aumentado durante las tres últimas décadas, aduciendo que las universidades inflan sus tasas académicas nominales y conceden «becas» compensatorias con el fin de competir mediante la



sido benévola con centros como la University of Alabama, una institución históricamente mal financiada ubicada en uno de los estados más pobres del país. El predominio deportivo y los sofisticados algoritmos de fijación de precios para adaptar los costes reales de las matrículas a los estudiantes venidos de fuera del estado han contribuido a revertir su situación. Menos afortunados han sido centros como la West Virginia University, cuya análoga apuesta por el aumento de los gastos para revertir el descenso de las matriculaciones no dio resultado y ahora se plantea, de acuerdo con la información disponible, cerrar gran parte de su enseñanza de humanidades<sup>20</sup>. El auge que han experimentado los *rankings* de clasificación universitaria desde la década de 1980 ha tenido efectos similares, ya que ha desinflado el valor económico de las titulaciones de escaso prestigio, al tiempo que ha aumentado la competencia por las plazas ofrecidas en la Ivy League y en un puñado de universidades públicas de primera fila. Estos dos últimos grupos, que han visto como su preeminencia era magnificada por «dotaciones» majestuosas, por enormes reservas de capital, complementadas con rendimientos financieros, y por generosas donaciones de multimillonarios, monopolizan el discurso dominante y sus estudiantes, dirigentes y políticas de admisión se someten a un escrutinio interminable.

En el ámbito de la política nacional, los gobiernos republicanos han tratado de aumentar la competencia y la transparencia, dejando por lo demás el sistema de financiación estudiantil más o menos inalterado. Por su parte, los gobiernos demócratas han sido caprichosos, a veces moderando los aspectos más crueles del sistema mientras mantenían intactos sus contornos más generales, mientras que otras han agravado sus desequilibrios en nombre del progreso. En 2014, por ejemplo, el gobierno de Obama estableció nuevos planes de reembolso en virtud de los cuales los prestatarios no pagarían más del 10 por 100 de sus ingresos; al cabo de un cuarto de siglo, se condonarían las deudas restantes. Ese mismo año, las autoridades, preocupadas por la baja tasa de

---

discriminación de precios y, al mismo tiempo, denotar prestigio a través de precios nominales elevados, Dan Currell, «The Truth about College Costs», *National Affairs*, núm. 58, verano de 2023. Aunque este fenómeno está muy extendido, no ha impedido el continuo aumento real de las matrículas. Currell basa su argumento en datos que solo abarcan el sector privado, mientras que, por las razones anteriormente expuestas, los aumentos reales de las matrículas se han concentrado en el sector público, que es mucho más amplio.

<sup>20</sup> J. Mitchell, *The Debt Trap: How Student Loans Became a National Catastrophe*, cit., p. 170.

matriculación universitaria entre la población negra, optaron por suavizar las restricciones sobre los préstamos concedidos a los padres para la educación de sus hijos. En nombre de la igualdad racial, los padres negros pobres disfrutaban ahora del derecho a destruir sus finanzas personales para que sus hijos pudieran ascender a la clase media.

Incluso los avances reales tienen su lado problemático. Los reembolsos de los préstamos concedidos por el gobierno federal siguen siendo recaudados por una amalgama de empresas privadas, que suelen prestar con falta de criterio unos servicios por los que son remuneradas con cargo a las arcas públicas. Los nuevos planes de reembolso, más humanos, han ocupado su lugar en un paisaje apenas comprensible y repleto de opciones con denominaciones varias, para que cada uno «elijan su propia aventura»: *Income-Based Repayment (IBR)* [«reembolso basado en los ingresos»], *Income-Contingent Repayment (ICR)* [«reembolso contingente en función de los ingresos»], *Pay As You Earn (PAYE)* [«pague según gane»] y, más recientemente, el plan de Biden, *Saving on a Valuable Education (SAVE)* [«ahorrar en una educación valiosa»], antes llamado REPAYE Plan. El intento en curso de canalizar automáticamente a los prestatarios morosos hacia este último plan representa el primer esfuerzo vacilante del Estado por actuar como guía en este laberinto financiero producto de su propia creación. Los deudores siguen estando, en general, a merced de las oficinas de ayuda financiera de las universidades o bien de sus propios «gestores de préstamos»; ninguno de los dos tiene un buen historial, ni muchos incentivos para ayudar. Al igual que sucede en otros ámbitos, la barroca idiosincrasia de la burocracia pública estadounidense reproduce aquí involuntariamente un tipo distorsionado de *laissez-faire* en el que prosperan los más hábiles a la hora de comprender sus entresijos y hacer un uso interesado de ellos, mientras los demás que no lo son fracasan.

Mientras la mayor parte de los comentaristas de la izquierda centran su atención en la cuestión inmediata del alivio de la deuda estudiantil, se han presentado pocas alternativas convincentes al *statu quo*, marcado por una oferta pública cada vez mayor de créditos a estudiantes que pagan facturas cada vez más altas. Desde la derecha, donde abundan las críticas moralizantes a la «hipertrofia administrativa» y a la cultura política identitaria, se han propuesto planes para castigar a los centros educativos por los impagos de los estudiantes y para vincular la financiación a las primas salariales que ofrecen, todo justificado con el pretexto de

controlar el gasto. Este programa, al que se opone el mundo académico por su visión claramente comercial del valor de la educación, favorecería a las instituciones ricas con estudiantes ricos. Una interesante sugerencia reciente de la izquierda proponía bajar los precios y crear un nuevo sistema universitario, asequible y socioeconómicamente diverso, bajo la protección del gobierno federal<sup>21</sup>. Pero las agrias discusiones partidistas actuales en torno a la cultura de la educación superior hacen difícil reunir el apoyo político necesario para llevar a buen puerto una empresa tan ambiciosa, que se enfrentaría a la resistencia secular mostrada por la elite política y educativa a la noción de una universidad federal.

### IMPLICACIONES SOCIALES

¿Qué balance debe hacerse de la expansión de la educación superior financiada con deuda en Estados Unidos? En primer lugar, tomado en sus propios términos, el hecho de que casi el 40 por 100 de los estadounidenses pasen ahora cuatro años en la enseñanza superior —una proporción muy superior a la media del mundo desarrollado, que es del 19 por 100— es un logro social digno de aplauso. La calidad de la enseñanza y el contenido académico no son iguales en el heterogéneo paisaje estadounidense, que abarca instituciones públicas, privadas, con ánimo de lucro y religiosas, y en las cuales gran parte de lo que se enseña se imparte en las escuelas secundarias o técnicas en otros países. Sin embargo, un Dewey se sentiría merecidamente orgulloso de una nación capaz de involucrar a 15 millones de personas simultáneamente en la vital actividad intelectual de una educación universitaria.

En los estratos medios de la sociedad estadounidense asistir a la universidad es un rito de paso que simboliza la salida del adolescente del hogar familiar hacia un mundo más amplio. Motivo de orgullo para los padres y oportunidad para «ampliar horizontes», así como para la indulgencia hedonista, para los jóvenes, la universidad como mercancía y estilo de vida tiene tanta aceptación en la sociedad estadounidense como siempre, placer que constituye al mismo tiempo una «inversión en el propio futuro». Para el individuo, el precio de un título es considerable, como hemos visto: dos tercios de los estudiantes se endeudan y se gradúan con una deuda media a sus espaldas de 29.000 dólares. Las recompensas son igualmente

---

<sup>21</sup> Laura Beamer y Marshall Steinbaum, «America's Student Loans Were Never Going to Be Repaid», *The New York Times*, 13 de julio de 2023.

palpables: un libro reciente de un antiguo funcionario del sector económico del gobierno de Bush calcula un rendimiento medio del 14 por 100 de la inversión en un título universitario, con un aumento de los ingresos totales a lo largo de la vida de casi un millón de dólares<sup>22</sup>.

La obsesión cultural por la «experiencia universitaria» es, por otro lado, fácilmente comprensible en una sociedad con un Estado del bienestar tan desvencijado: la universidad se antoja como un idilio antes de atravesar el umbral hacia décadas de trabajo incesante. Al gestionar lo que son esencialmente ramas de ligas deportivas profesionales, la universidad estadounidense también afirma su centralidad en la concepción nacional del ocio. El interés masivo por el deporte universitario parece representar un verdadero filón en la relación existente entre la academia y la sociedad (de clase media) en Estados Unidos. Su potencial lucrativo –un contrato de televisión reporta hoy en día un millardo de dólares anuales a la conferencia «Big Ten» de centros educativos donde se juega al fútbol americano– puede transformar las instituciones en ganadoras y perdedoras, dentro y fuera del terreno de juego<sup>23</sup>.

¿Es la educación superior de masas financiada mediante el endeudamiento una fuerza igualadora en la sociedad estadounidense? El discurso dominante se afana en señalar que un título universitario sigue siendo un billete para salir de la pobreza: los estudiantes de rentas bajas que obtienen una licenciatura suelen acabar en los niveles de renta más altos. Pero hay un dato menos publicitado: solo el 23 por 100 de los graduados de secundaria del quintil inferior de renta se matriculan en una institución universitaria durante cuatro años en un plazo de dieciocho meses, frente al 74 por 100 del quintil superior<sup>24</sup>. La visión de la enseñanza superior en términos de capital humano no se equivoca al suponer que las recompensas van a parar a quienes disponen de capital (financiero) para invertir. Tampoco los beneficios se distribuyen por igual. Instituciones con niveles de inclusividad similares, con alumnos de composición racial y social parecida, varían mucho en cuanto al aumento del potencial de ingresos de sus titulados. No es sorprendente que las universidades democráticas de masas que datan de la década de

---

<sup>22</sup> Beth Akers, *Making College Pay: An Economist Explains How to Make a Smart Bet on Higher Education*, Nueva York, 2021, p. 19.

<sup>23</sup> Alan Blinder y Kevin Draper, «Topping \$1 Billion a Year, Big Ten Signs Record TV Deal for College Conference», *The New York Times*, 18 de agosto de 2022.

<sup>24</sup> Sarah Reber y Ember Smith, «College Enrolment Disparities», Brookings Institution, 23 de enero de 2023.

1960 –las CUNY *schools* de Nueva York y el sistema universitario público de California– obtengan los mejores resultados<sup>25</sup>. Pero, en general, las instituciones menos selectivas matriculan a más estudiantes pobres y pertenecientes a minorías y les conceden títulos que tienen menos probabilidades de propulsarles a niveles de renta más altos<sup>26</sup>. La discriminación positiva –la práctica de dar preferencia a los solicitantes de grupos raciales minoritarios, prohibida por el Tribunal Supremo en junio de 2023– tuvo un efecto real en la composición racial del estrato dirigente estadounidense, pero una influencia desdeñable en el ámbito social, ya que no benefició a más de diez mil estudiantes al año en un país de 300 millones de habitantes<sup>27</sup>. Sin alterar la configuración social general, la enseñanza superior en Estados Unidos puede seguir brindando oportunidades al individuo «talentoso» carente de medios, es decir, al que disfruta de las condiciones necesarias en el hogar y en la escuela secundaria para tener éxito académico y para navegar por los vericuetos de las admisiones y las ayudas financieras a fin de ingresar en la escuela adecuada al precio justo.

### ¿Una clase de profesionales titulados?

Aunque en general se admite que la primera fase de la expansión de la enseñanza superior en el mundo desarrollado trajo consigo un aumento de la productividad, las fases posteriores de crecimiento no han producido avances similares. Ahora el fenómeno se ha extendido a las titulaciones superiores, que suelen requerir préstamos más elevados. El número de licenciados con máster se ha duplicado con creces en los últimos veinte años hasta alcanzar los 24 millones en 2021. Los economistas ortodoxos explican este aumento de titulados y las razones de la prima salarial duradera que exigen con un argumento sencillo: la gran demanda de mano de obra cualificada en una economía desindustrializada y tecnológicamente sofisticada. Sin embargo, las habituales quejas por «sobrecualificación» parecen indicar que los diplomas han pasado a ser un requisito para una serie de puestos que podrían cubrirse fácilmente con trabajadores no licenciados. Algunas teorías afirman que la

---

<sup>25</sup> Raj Chetty *et al.*, «Income Segregation and Intergenerational Mobility Across Colleges in the United States», *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 135, núm. 3, agosto de 2020.

<sup>26</sup> Jorge Klor de Alva y Cody Christensen, «Winners and Losers: Universities and the Pursuit of the American Dream», *American Enterprise Institute*, julio de 2020.

<sup>27</sup> Amy Harmon, «How It Feels to Have Your Life Changed By Affirmative Action», *The New York Times*, 21 de junio de 2023.

titulación sirve como indicador de la capacidad de formación en el puesto de trabajo; pero pasan por alto el hecho básico de que los títulos se han convertido en una nueva forma de barrera social que tiene amplias ramificaciones en el mercado laboral. En algún momento, cuando los licenciados se convirtieron en una masa crítica dentro de las profesiones, hecho acaecido seguramente en la década de 1980, cuando superaron el 20 por 100 de la población general, parece haberse consolidado entre ellos un cierto tipo de interés material común. Este interés de los titulados era lo suficientemente poderoso como para influir en decisiones relativas, por ejemplo, a la contratación o a la remuneración, aunque en la práctica cotidiana tal vez equivalía a poco más que al reconocimiento y al favorecimiento de tipos sociales similares. Los efectos agregados de este sentimiento mágico de camaradería entre los licenciados son imposibles de ignorar, sobre todo en una política nacional donde las coaliciones se divididen principalmente por la raza y el nivel educativo.

En Estados Unidos la legislación sobre la igualdad de oportunidades prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de «raza, color, religión, sexo (incluidos el embarazo, la identidad de género y la orientación sexual), origen nacional, edad, discapacidad o información genética», pero no por motivos de educación. Favorecer a los titulados es ahora, jurídicamente hablando, uno de los últimos prejuicios aceptables en nuestro país. A medida que retroceden otras formas de discriminación explícita, el estatus educativo, que sigue reflejando en general el origen social, se ha consolidado como una barrera de entrada. De esta forma, en sus consecuencias sociales, la educación superior constituye prácticamente la replica a escala individual de las divisiones preexistentes, al tiempo que amplifica estas en el ámbito político y económico.

En este contexto, la deuda estudiantil tiene varias connotaciones, que fortalecen algunas tendencias y complican otras. Tal y como se señala en un libro reciente, la burocracia de las ayudas financieras federales encubre un «código de conducta moral» tácito, que recompensa a los solicitantes por aparecer sobre el papel como miembros de una unidad familiar idealizada<sup>28</sup>. Pero los préstamos estudiantiles también erosionan otros pilares del estilo de vida de las familias de clase media en la medida en que, por ejemplo, las deudas pendientes disuaden del

---

<sup>28</sup> Caitlin Zaloom, *Indebted: How Families Make College Work at Any Cost*, Princeton (NJ), 2019, p. 75.

matrimonio y de la compra de una vivienda<sup>29</sup>. Los préstamos, que suponen una carga para la economía familiar, convierten la asistencia a la universidad en una decisión financiera de alto riesgo, que conlleva elevados costes en caso de fracasar en el intento de obtener un título, incluido el posible descenso a las filas de los pobres precarios, agobiados por la deuda sin haber obtenido la prima salarial compensatoria. Este riesgo funciona como justificación moral de dicha prima, que depende de la inversión no solo de tiempo y esfuerzo, sino también de los ingresos futuros. Para la mayoría de los prestatarios, que se comprometen a devolver sus préstamos poco después de graduarse e independientemente de sus ingresos, la deuda actúa como una disciplina frente al mercado laboral, obligándolos a incorporarse más rápidamente a la población activa<sup>30</sup>. También supone un poderoso incentivo para que los deudores estudiantiles luchen por unos salarios más altos y cooperen en ese esfuerzo, lo que fortalece aún más el sentimiento de solidaridad entre los titulados y mitiga en parte el carácter «aislado» de la relación deudor-acreedor descrita por Cédric Durand.

Por otro lado, la cuestión ha sembrado la discordia entre las bases del Partido Demócrata, dividiendo a los graduados endeudados de los que no lo están. La revuelta de los deudores liderada por Sanders en 2020 era un reflejo de la ira de la clase de los profesionales titulados precarios, que no habían recibido una prima salarial suficiente como para reembolsar sus obligaciones. Tras los ataques de los liberales, temerosos de sentar un mal precedente, y de los sectores conservadores, opuestos a los privilegios para la clase universitaria, llegó el fallo del Tribunal Supremo del pasado mes de junio con el cual las esperanzas de condonación parecían haber llegado a su fin. Pero el movimiento de condonación de la deuda también apeló al grupo de los universitarios «con algunos estudios», que constituye el 20 por 100 de la población adulta, es decir, aquellos que se matricularon en carreras que no terminaron y por las que, por lo tanto, no recibirán ningún beneficio salarial. La opinión dominante había venido desatendiendo a este segmento, aduciendo de que eligieron mal y ahora habían de atenerse a las consecuencias. La simpatía se reservaba para aquellos que fueron engañados por universidades con ánimo de lucro sin escrúpulos. Comprensiblemente, la condonación de la deuda

---

<sup>29</sup> Clifford Robb y Samantha Schreiber, «Married with Children? The Role of Student Loan Debt», SSRN, 23 de septiembre de 2019; Álvaro Mezza *et al.*, «Student Loans and Homeownership», *Journal of Labour Economics*, vol. 38, núm. 1, 2020.

<sup>30</sup> Gerald Daniels y Andria Smythe, «Student Debt and Labour Market Outcomes», AEA Papers and Proceedings, vol. 109, mayo de 2019.

resultó ser un grito de guerra convincente para este último grupo, que, por otro lado, al final no resultó ser lo suficientemente numeroso ni políticamente fiable como para forzar el cambio.

El otoño pasado, la oxidada y deficiente maquinaria del sistema de «gestión de préstamos» volvió a ponerse en marcha al reanudarse los reembolsos después de la pausa pandémica de tres años<sup>31</sup>. Las tribulaciones de los licenciados se mantuvieron en un nivel relativamente bajo en el contexto de un mercado laboral fuerte. Como ocurre con otras formas de deuda privada, los altos niveles de endeudamiento estudiantil representan, a escala social, una apuesta de la estabilidad social por el crecimiento económico. Seguramente la próxima recesión traerá consigo nuevas tensiones en torno a la posibilidad de una amnistía entre licenciados endeudados y no endeudados, así como entre trabajadores licenciados y no licenciados. A pesar de la decisión del Tribunal Supremo y mientras el gobierno federal siga siendo el titular de la inmensa mayoría de los préstamos estudiantiles, esta opción política seguirá viva.

---

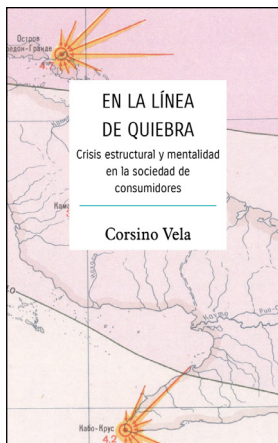
<sup>31</sup> Gabriel T. Rubin y Andrew Restuccia, «The Return of Student-Loan Payments Has Been a Logistical Nightmare», *The Wall Street Journal*, 21 de diciembre de 2023.



traficantes de sueños

www.traficantes.net

C/Duque de Alba 13, 28012. Madrid



# En la línea de quiebra

## Crisis estructural y mentalidad en la sociedad de consumidores

*Corsino Vela*

Colección: mapas 83

PVP: 16 €

El capitalismo ha entrado en fase de crisis terminal. El agotamiento y contaminación de la biosfera, el estancamiento de los salarios, la crisis del Estado de bienestar, la inmiseración de las periferias del planeta, incluso la reciente pandemia y la generalización de los problemas de salud mental, son solo algunos de los síntomas de esta situación de agotamiento. A pesar de esta tendencia, y de su negación por parte de gestores y solucionadores de todo tipo, vivimos en una sociedad que dispone de pocos recursos intelectuales y políticos para hacer frente a esta crisis. Lo que en este sentido nos propone Corsino Vela es un diagnóstico del capitalismo a partir de las contradicciones y los límites objetivos inherentes al propio desarrollo del modo de reproducción social capitalista, como son el agotamiento paulatino de la rentabilidad del capital, el aumento de las actividades improproductivas, el incremento de los costes de la reproducción social o el carácter cada vez más excedentario de una proporción cada vez mayor de la población del planeta. Al mismo tiempo, Corsino apunta a las dificultades políticas que enfrentamos y que resultan manifiestas en la producción de una subjetividad consumista, ensimismada y dependiente, lo que sin embargo no debería excluir la posibilidad de su eventual autoconstitución como sujeto antagonista, dentro del inevitable conflicto que la relación social capitalista entraña.